

Políticas de la memoria y el olvido*

SAÚL SOSNOVSKI

Resumen

A lo largo de este ensayo, el autor aborda la problemática política sudamericana desde una triple dimensión: la cultura del miedo (los regímenes dictatoriales del pasado); la cultura de la pluralidad y la tolerancia (los regímenes en vías de democratización), y la cultura de la memoria histórica. Esta última funge como el hilo conductor a lo largo del trabajo de Sosnovski, ya que su tesis principal está centrada en el imposterizable deber de recuperar la memoria histórico-colectiva del periodo de represión militar con el fin de poder reconstruir a partir de ella una sociedad abierta y democrática. El autor analiza, asimismo, el papel que la intelectualidad tuvo, ha tenido y deberá tener en el proceso de transición entre la etapa represiva militar y la civil democrática. El ensayo concluye que si se quiere lograr una democratización en todo sentido (político, educativo, cultural e histórico), es menester rescatar el elemento cultural—revitalizado por la *memoria*—para fortalecer una “cultura para la democracia”, abatir las “políticas del olvido” y lograr mantener y consolidar el difícil y frágil tránsito del Imperio del Acero al Imperio de la Ley.

Abstract

In this article the author presents a three dimensional political outlook for South America: the culture of fear (the dictatorships of the past), the culture of plurality and tolerance (the regimes on the road to democratization); and the culture of historical memory. This last dimension underpins Sosnovski's core thesis in this essay, the unhesitating duty to regain the collective-historical memory of the period of military repression, and found upon it a democratic and open society. The author also analyzes the past, present and future role of intellectuals in this process of transition, from a military repression to a civil democracy. The author concludes that if full democratization is to be attained (political, educational, cultural, historical), the cultural dimension must be salvaged—revitalized by recollection—to strengthen the “culture for democracy” and stall the “bygones’ policy”, so that the difficult and fragile transit from an Empire of the Sword to an Empire of the Law can persevere and consolidate.

Si bien algunos de los lineamientos a ser expuestos son aplicables a otras regiones americanas, las siguientes páginas se

* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la Conferencia “Consolidating Freedom: The Role of Civil Society”, organizada por el National Humanities Center y coaus-

concentrarán en el impacto que ejerció la represión cultural en el Cono Sur, así como en el papel que desempeñaron, y pueden desempeñar, las diversas agencias culturales en el proceso de redemocratización. Las divisiones culturales de Latinoamérica suelen hablar del Cono Sur como una unidad funcional que abarca a Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y que —según convenga— puede llegar a incluir a Brasil. En el contexto que nos ocupa, es importante recordar que el Cono Sur ha sido una inflexión pertinente desde el punto de vista geopolítico —como lo demostraron siniestramente los servicios de inteligencia de estos países durante sus respectivas dictaduras—, pero no es tal desde una perspectiva cultural. Los integrantes del Mercosur, al cual Chile aún permanece ajeno, anticipan que a la par de los proyectos económicos se irá gestando una cultura común cuya gravitación podría llegar a ser más influyente que la que se vislumbra para los integrantes del Tratado de Libre Comercio. Cabe acotar al respecto que, a pesar de la obligada sintonía del liderazgo económico de estos países, y de la privatización de amplios sectores tradicionalmente asociados con los fueros del Estado, las identidades culturales de México, Estados Unidos y Canadá no han sido (ni podrán ser) reducidas a una única versión nórdica del mundo. Por otra parte, esos mismos intereses culturales están sometidos a variaciones en áreas que se encuentran más allá de intereses compartidos en lo que hace al mantenimiento del orden democrático y a una apuesta por el éxito duradero de la economía de mercado.

La conjunción cultura-democracia surge por una imposición histórica. Resulta de la derrota de otras opciones e instaura un tono menos estridente, si bien no menos urgente, en los debates políticos. Indica la aceptación de reglas del juego que en principio se presentaban como similares para todos los participantes; implica, además, trabajar sobre consensos y acuerdos básicos, con metas sometidas a una retórica que se supone debe prescindir de la violencia —excepto la “normal” del mercado— para imponer su visión del mundo.

En poco más de tres décadas hemos pasado en casi toda América Latina (con la notable excepción de Brasil, cuya dictadura, iniciada en 1964, reprimió su participación en estas polémicas) por plantea-

piciada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, febrero de 1995.

mientos, propios de paneles y publicaciones, sobre “literatura/cultura y revolución”, “la función social del intelectual/escritor/artista”, “literatura/cultura/arte y sociedad” y otras variantes análogas. Estos títulos rubricaban una pragmática de la figura del intelectual y de su producción. Apuntaban, por otra parte, al “compromiso” como clave de una responsabilidad asumida a partir del reconocimiento de la marca por parte de un público consumidor, de un público que se sentía con derecho a reclamar por la conducta de los demás. Como solía decirse entonces, la literatura —para tomar una manifestación cultural— estaba en la calle y no sólo en recintos y gabinetes.

Desde los exaltados años de una revolución lograda, de otras conquistas más efímeras y de tantos otros intentos que quedaron en lo escasamente realizable, se produjeron sensibles pérdidas y la caída de toda una región en dimensiones inéditas de la represión dictatorial. La salida de los regímenes autoritarios, así como las negociaciones políticas en países que han ejercido otras muestras del poder, se han dado —cada una a su manera, como lo documentan abundantes análisis sobre mutaciones y diferencias— bajo el signo de la democratización. Si bien actualmente sólo se habla en términos de consolidación y continuidad, un caso como el de Paraguay sirve para alertar sobre posibles reincidencias en la práctica autoritaria. La retórica política ha mostrado, por su parte, la transición de la invocación al “pueblo”, al fortalecimiento de la “sociedad civil” como antídoto para la permanente amenaza de un retorno a regímenes disfrazados (o no) de democracia.

Junto a la vigencia formal del Estado de Derecho, y como condición de su retorno, la democracia latinoamericana se ha visto uncida a la desenfrenada privatización y a la reducción del Estado y de sus responsabilidades ante la ciudadanía. En los momentos inaugurales de este orden se llegó a creer que el ímpetu propio de la centralidad financiera de la región podría desplazar a selectos países latinoamericanos —poseedores de índices que justificaban todo arrebatado macro-optimista— de su condición periférica con respecto al mundo desarrollado. Si bien el sueño primermundista no se ha disipado en algunas latitudes sureñas, la ilusión tiende a desvanecerse rápidamente cuando, junto al deseo, se cotejan los correlatos del nuevo orden económico: sus gravámenes, altos costos sociales y un proceso de desajuste financiero que segrega a sectores de la población cada

vez mayores y los relega a los márgenes de cualquier mecanismo de integración socioeconómica. Por encima de otros considerandos —que van desde el agotamiento de opciones gubernamentales y derrotas militares al autorreconocimiento de los cometidos alcanzados y, en todos los casos, de una estrepitosa bancarrota ética con secuelas demasiado notorias en algunos sectores de la ciudadanía—, es evidente que la implantación de la economía de mercado es el eje primordial (y hasta cabría suponer, causal) en la redemocratización de los países del Cono Sur. Esta política económica ha sido, a su vez, una de las directrices en los mecanismos propios de la unificación nacional, regional e interregional de los países americanos. Es, pues, una clave ineludible cuando se analizan las relaciones entre el Estado y sus instituciones culturales, así como su relación con la producción cultural formal e informal de la sociedad civil.

Desde los sectores progresistas hasta la izquierda más radicalizada, la función de la cultura fue tema de debate y aun de afinación en los propósitos que organizaron la agenda política de los años sesenta y setenta. Durante el periodo de las dictaduras, cuando no se callaba, además de sobrevivir dentro como fuera posible, de repensar lo fundacional con miras al futuro, se denunciaba, documentaba e impugnaba la violación de los derechos humanos. El breve periodo de redemocratización permitió algunos ejercicios para recuperar la memoria y para incorporar lo acaecido a la conciencia nacional. Es curioso, sin embargo, que con pocas excepciones ello no se haya transformado en un motivo recurrente en las artes y las letras; por otra parte, los aniversarios de los golpes han sido ocasiones propicias para el recuerdo. Es como si también el área cultural respondiera al frenesí de la posmodernidad, a la velocidad y al vértigo de otros centros para los cuales el olvido y la desnacionalización han sido cuotas de acceso. O quizá, conocedores de las leyes de la oferta y la demanda, se adecuaron a la escasa exigencia del público que estaba, o quería estar, en otra.

Algunos de los primeros debates que tuvieron lugar durante las etapas iniciales de la redemocratización argentina, trataron la escisión creada en la comunidad intelectual entre quienes permanecieron en el país durante los años de la dictadura y aquellos que optaron

o que fueron obligados a salir al extranjero. Como respuesta a un enfrentamiento similar, si bien menos dramático en sus definiciones, los intelectuales uruguayos acuñaron el término *insilio* para designar al exilio interior de los primeros. Con un tono menos estridente que el argentino, los chilenos también tuvieron que enfrentar la integración de una comunidad intelectual que, a pesar de las distancias geográficas y de altos grados de politización, no sufrió la fracturación que definió a la argentina de estos (y tantos otros) años. Por otra parte, el hecho de haber forjado un frente común en oposición a la dictadura de Pinochet, no impidió que se desarrollaran respuestas y estrategias diferentes frente a la misma, ni que en un gesto propio de los alegatos en aras de la supervivencia de la civilidad recuperada se negociaran respuestas para acomodar la presencia del general en la democracia.

En cuanto al ejercicio específicamente literario, los escritores exiliados pudieron representar la situación que aquejaba a sus países de origen sin temor a represalias, mientras que aquellos que vivían bajo regímenes dictatoriales tuvieron que refugiarse en formas alternativas para responder a la censura y a la amenaza de perdurables silencios. Una de estas opciones consistió en escribir sobre el siglo XIX y sobre otras instancias a partir de las cuales era posible articular filiaciones con su propio momento histórico. Al reflexionar sobre los episodios históricos que diseñaron los inicios de la nación, estos escritores apelaron a la memoria histórica para interpretar realidades más recientes y avizorar la construcción de una nación posdictatorial. De este modo, la resistencia propia del acto mismo de escribir bajo condiciones de represión constituyó una representación del pasado más inmediato y, a la vez, una contribución de largo plazo para la construcción de una cultura para la democracia.

En tales circunstancias, el compromiso con la memoria aparece directamente ligado al saber y a la acción que puede emanar de tal conocimiento. El compromiso en sí ya es una decisión acuciante y fundamental a la hora de entender el verdadero potencial de las fuerzas que se dirimen durante los procesos de redemocratización, particularmente en países donde el término "fragilidad" se asocia (al parecer significativa y automáticamente) a los gobiernos civiles electos luego de dictaduras como las vividas en el Cono Sur. Recordemos que la "fragilidad" se esgrimió para justificar pactos civiles, así como

negociaciones o capitulaciones frente a las fuerzas armadas. En términos efectivos, sirvió para imponer el maquillado silencio oficial del estadista que piensa en la reconciliación y el futuro. Visto desde las perspectivas de la ley y de la ética, las variaciones nacionales en torno al punto final cancelaron la posibilidad de llevar a su término la acción legal que se imponía para quienes ejercieron sistemáticamente el terror de Estado y la violación de los derechos humanos.

El desarrollo político seguido por los países del Cono Sur marcó en sus respectivos momentos el fin de la fase transicional de la redemocratización y dio paso a sus correspondientes etapas de consolidación. Sin embargo, los pronunciamientos de un acaudillado sector del ejército paraguayo, la guerra limítrofe entre Perú y Ecuador, los retrocesos en Haití, Perú y Guatemala y las graves crisis constitucionales que pudieron ser superadas en Brasil y Venezuela sin una intervención militar directa, así como las complejas crisis políticas que sacuden a México, resaltan la precariedad de estas democracias, así como la de sus reformas más recientes. Aunque desde el actual frenesí de la desmemoria y de la satisfacción inmedatista parezcan distantes, estos hechos deben ser tenidos en cuenta para seguir la trayectoria de la participación política de aquellos sectores que intentaron derrocar gobiernos civiles y que, por último, consiguieron demostrar que los militares no se habían retirado a sus cuarteles de invierno. Las amenazas de un retorno a sistemas autoritarios no se han disipado, ni éstos han cesado emblemáticamente por el hecho (sin duda valioso) de haber remplazado una figura militar por un presidente civil. Es en el terreno de los valores democráticos donde se libra la nueva batalla por ese futuro que, con una leve pátina primermundista, se anuncia como un dechado de progreso.

Una de las lecciones que los países del Cono Sur debieron haber aprendido como consecuencia de los años en que estuvieron sometidos a regímenes dictatoriales, es que su respectiva excepcionalidad, cultivada en aras de la identidad nacional o de una ideología partidista, no siempre es aplicable al análisis de la esfera política. Bajo la "Doctrina de la Seguridad Nacional", por ejemplo, fueron percibidos como una unidad; muy poco tiempo después la abultada deuda externa —contraída precisamente durante los gobiernos militares— les adosaría el semblante del empobrecimiento irresponsable de sus pueblos.

A partir de los años ochenta la región se acogió al calor de la democratización con un discurso que enfatizaba la libertad política por encima de cualquier otro derecho y reivindicación económica y social. En los noventa reina la causa subyacente que motivara la depredación, el encarcelamiento y las masacres comunes a toda la región —actos que fueron perpetrados para instaurar este nuevo orden económico—. El énfasis en réditos económicos, con el consecuente viraje en la escala de valores, así como las relaciones cada vez más íntimas con los círculos paradigmáticos de la inversión extranjera, han relegado o vaciado otros componentes que son centrales para la identidad y la cultura de la nación.

En este contexto, y entre otros ejemplos, se puede mencionar el notorio malestar que despliega una vasta mayoría de la población ante libros y películas que tratan la violencia de esta historia compartida. Es la misma actitud de rechazo y deseado olvido que enfrentan las Madres de Plaza de Mayo en sus marchas semanales frente a la Casa Rosada. Si bien esta reacción puede ser sólo parcial y sintomática, apunta a una zona deteriorada que es ignorada o, cuanto más, soslayada en nombre de un bien mayor y de lo ya obtenido. Sin lugar a dudas, es comprensible el regocijo por la formalización de los procesos electorales, así como la interpretación de los juicios llevados a cabo en Argentina contra los líderes de las juntas militares de la última dictadura como un triunfo político y ético, o incluso el hallar ponderable el retiro negociado de los militares uruguayos mediante el plebiscito; sin embargo, estos avances no alcanzan para proclamar el advenimiento definitivo de una nueva era.

En estos tiempos de “democracias consolidadas”, los gobiernos han privilegiado el desarrollo económico —y, por consiguiente, de su propio asentamiento político— por encima de transformaciones institucionales de largo plazo. Los nomencladores dominantes enuncian “economía de mercado”, “privatización”, “reducción del Estado”, como única opción. Y ello aun cuando —como lo demostrara el colapso mexicano y como se ha vuelto a comprobar reiteradamente en las explosiones sociales en diferentes países latinoamericanos—, una transición no se puede llevar a cabo sin considerar el elevado costo social de un programa político que limita los réditos de estas versiones de la democracia a sólo un porcentaje reducido de la población. La consolidación democrática será incompleta si no se

desarrolla una integración regional y si no se diseña e instaura una cultura para la democracia. A tal efecto, y más allá del cumplimiento de las estructuradas normas políticas de la democracia, cada país deberá fortalecer el hábito ciudadano que se afianza en la legalidad y en la comprensión internalizada y cabal del concepto de derechos humanos; deberá, asimismo, incentivar la incorporación de sectores marginados de la población por medio de su inclusión en los procesos políticos y en economías de crecimiento real. Estas premisas aluden tanto a aquellos sectores que nunca compartieron o que nunca tuvieron acceso a los círculos de decisión, como a los miembros de las fuerzas armadas en tanto integrantes del orden civil.

En tales condiciones, quienes practican las artes y las letras, junto a quienes se dedican a la educación y los medios de comunicación masiva, deben asumir un papel preponderante en la restauración de los valores éticos subvertidos por el terrorismo de Estado. Los regímenes militares han cedido (o perdido) el gobierno; su legado, sin embargo, no ha desaparecido. Éste se registra, inclusive, en estrategias discursivas —y en estructuras de pensamiento— que aún siguen vigentes. Dichas prácticas manipularon y resemantizaron el sentido originario de ciertos vocablos, como aconteció con “asesinados” por “desaparecidos” —posiblemente la más aterradora contribución léxica de la dictadura a la lengua castellana—; u optaron, para apelar a otro ejemplo argentino, por la amenazante “zona de detención” en vez de “parada de ómnibus”. También, de este modo, las dictaduras alteraron la vida cotidiana. En lo que ya se vislumbra como un efecto de largo plazo, lograron vaciar de sentido el discurso político con el objeto de allanar el camino para que políticas económicas (fallidas para la mayoría pero efectivamente estabilizadoras y deslumbrantes en su rendimiento macroeconómico) pudieran tomar el poder con la asunción del mando por parte de los gobiernos democráticos.

En el marco de este proceso, y en relación directa con el futuro de las democracias en los países de la región, es importante analizar las políticas del olvido, el impacto en el corto y largo plazos de la pérdida de la memoria colectiva —la voluntaria y la inducida— así como el papel que la cultura puede y debe desempeñar para fortalecer las instituciones democráticas y asegurar la continuidad del deseo consensual de vivir en democracia. Creo que la sensación de pérdida

periódica de la memoria se debe a que la violencia ejercida desde el Estado —tanto bajo regímenes dictatoriales como desde los marcos de gobiernos electos a perpetuidad institucional— no ha sido, ni es, percibida como una catástrofe. Parecería, más bien, que se tratara de un componente propio, si bien el más siniestro, del ciclo dictadura-democracia al que aparentemente debían estar condenadas las tierras americanas. Quizá también por ello esta ronda dictatorial no produjo una radicalización del discurso literario, como tampoco cabe esperar que la produzca la democracia con su libertad de ejercer la palabra.

En la era massmediática de los *sound bites* —valgan éstos como pobre excusa—, el público se ha acostumbrado a la brevedad informativa, al rápido recorte del goce y, por supuesto, del sufrimiento. Se existe por los medios: se ha pasado de la práctica de lo exclusivo, del ejercicio solitario de la escritura, a la promoción de la imagen. Todo llega a ser imagen; del correr de las páginas a los pantallazos del *zapping*. Nada decanta, todo fluye. Se vuelve imprescindible, entonces, producir la instantánea memorable como legado de una época o pasar al consumo rápido sin mayores expectativas. Estamos ante los límites de la representación: no sólo de aquello que desafía la magnitud de lo comprensible sino de todo lo que exige penetrar más allá de la imagen que se maneja en los medios a flor de piel.

Heridos y muertos ubicados entre historias más amenas y con cortes publicitarios de limpiadores y sonrisas de pasta dentífrica no conducen a la perduración de la memoria. Precisamente porque es dudoso que alcance a tenerlo en otro lugar, algunos esperamos que el sufrimiento que no tolera el olvido (que no debe tolerarlo) tenga su espacio en la literatura y en otras expresiones del arte. Sin llegar a transformar al texto en un artefacto histórico, no es desmesurado pensar en una *literatura para ver* y no solamente para ser vista, en una que transa con el cómo fue y cómo es posible, y no sólo con el deslumbramiento de la pirotecnia o con los reactivos de la moda.

A John Wilkins, personaje de Borges ("El idioma analítico de John Wilkins"), le atormentaba la imprecisión del lenguaje; a Funes ("Funes el memorioso"), su falibilidad representacional. Y fueron precisamente las mismas juntas militares argentinas las que convirtieron la imagen de Borges en producto de exportación, las que promovieron lógicas y prácticas discursivas aberrantes en una dirección

diametralmente opuesta a las profundas inquisiciones de una figura textual que, por cierto, no les interesaría dilucidar. La perversión del lenguaje les permitía vestir a los desaparecidos como turistas que abandonaron el país sin previo aviso; la frase solidaria “¿sabe dónde están sus hijos?” adquirió el tono de una amenaza; “por algo será” llegó a bastar como una justificación inapelable de las desapariciones. Cuando “por algo será” fue adoptado por el grueso de la ciudadanía para acatar la lógica del terrorismo de Estado, el siniestro despliegue de las juntas pudo celebrar otra victoria. Para quienes se beneficiaron de las medidas adoptadas durante la dictadura, así como para quienes declaran no haber sido afectados por la ausencia del orden constitucional, esas tres palabras significan hasta el día de hoy el punto final de toda discusión y de todo cuestionamiento de la violencia.

Tanto durante el conflicto limítrofe entre Chile y Argentina, como durante las medidas que acabaron en la guerra de las Malvinas, los habitantes de Argentina y Chile y, en menor grado, los de otros países involucrados directa o indirectamente en el conflicto, vivieron bajo un clima que fomentó ignominiosas formas del nacionalismo y reducciones banales y cínicas sobre la lucha contra el imperialismo. Y ello se dio mientras continuaba el desmantelamiento de la vida institucional por medio de una represión “venida a menos” cuando se la compara con los primeros años de las respectivas dictaduras. Cabe consignar, siquiera de paso, que, para Argentina, este dato es particularmente llamativo cuando se analizan las manifestaciones de quienes, pocos días antes de la proclama por la soberanía de las islas, fueron apaleados por las “fuerzas del orden”, así como las declaraciones de los exiliados en favor de la posición argentina, representada en esos momentos por los causantes de su propio exilio y del terror que destruyó a miles de habitantes del territorio nacional.

En un espacio de porosas memorias, quizá no deba sorprender que algunos sectores de la población evidenciaran rápidas señas de cansancio y saturación ante el tema de los desaparecidos, ni que se alentaran las estrategias del olvido mientras se estaban llevando a cabo los históricos juicios a los miembros de las juntas militares; y tampoco, que en la trastienda, y en aras de la reconciliación y la pervivencia de la democracia, se estuvieran negociando amnistías y la continuidad privilegiada de las fuerzas armadas tanto en Argentina

como en los países vecinos. La perduración de la memoria se ha convertido en una responsabilidad ciudadana. La noción misma de “nunca más” está arraigada en la memoria. El pasado inmediato tampoco ha sido incorporado en la reformulación de la retórica democrática como un factor central en la (re)construcción de nuestras identidades regionales y nacionales. Por el contrario, pareciera que todo futuro promisorio exigiera la anulación de aquellos oscuros años. En algunos países, inclusive, el discurso fundacional de los militares—característico de numerosas proclamas golpistas y que ha resultado tristemente acertado en su última expresión dictatorial—ha sido adoptado por políticos que apelan a términos mesiánicos para obtener un voto de confianza en gestiones que—si bien investidos de una simbología nacional—sólo apuntan en última instancia a promover intereses personales y sectoriales. En estos casos la construcción de una cultura democrática se ve menoscabada por la despolitización de segmentos de la sociedad recientemente incorporados al proceso electoral, así como de aquellos capaces de recordar la ineficiencia de una democracia limitada al ejercicio periódico de la voluntad ciudadana. Estamos atravesando un territorio donde tanto el estruendo oficial de lo promisorio como las resplandecientes estadísticas de crecimiento económico no alcanzan para encubrir el empobrecimiento real de amplios sectores de la región ni la fragmentación de la ciudadanía. Es imposible construir una verdadera democracia sin educación, sin historia, sin un asentamiento en la memoria. Ésta requiere el sentido de una comunidad afianzada por mitos nacionales, por vínculos de solidaridad, por una lengua común.

Cuando se producen encrucijadas críticas en que se revoca el imperio de la ley y se instala la arbitrariedad de los edictos y las conductas autoritarias, ciertas nociones y expresiones claves adquieren una resonancia histórica que va más allá de su acepción semántica. En el marco de los derechos humanos, éste sería el caso de los términos “supervivencia” y “justicia”. Mi énfasis en estas palabras no es casual. Insisto en el nivel discursivo porque, al margen de toda manipulación, la lengua permanece como el artificio de lo posible, la zona en que la imaginación puede diseñar alternativas a la imposición monolítica de la mentalidad autoritaria que sólo se reconoce en su propia versión de la realidad. Cuando la ciudadanía toma pose-

sión de una dimensión ética, su lengua puede articular una respuesta a la violación del cuerpo, al silencio de la muerte y, seguidamente, a la perversión de la justicia. Podrá hacerse cargo, además, de los objetivos más importantes de la sociedad civil.

Los regímenes totalitarios propician el silencio. Acatarlo, frecuentemente implica la supervivencia; también puede aludir a un acto de complicidad. En muchos casos, el rechazo de imposiciones normativas, así como la frustración ante la reiterada violación de la vida institucional por medio de la represión armada, no tiene otra salida que el silencio y la autocensura, y ello precisamente porque la disidencia conlleva los riesgos del exilio, de la desaparición, de la muerte. Cuando un país está habitado por la cultura del miedo, es comprensible que se opte por una supervivencia circunscrita a las restricciones autoritarias. Sin embargo, ya en democracia es inaceptable la continuidad de un paradigma en el que se renuncia a la vida en nombre de la supervivencia, así como tampoco es tolerable que se haga caso omiso de la responsabilidad ciudadana en la (re)construcción de la sociedad.

La réplica a la opresión está arraigada en el rechazo a la mentalidad autoritaria que imparte desde arriba el poder político y económico. Frente a esa verticalidad unidireccional, la imagen de una verdadera democracia se perfila como carente de un solo centro: éste está en todas partes y desde cada una de ellas irradia propuestas ajenas a todo sometimiento al arbitrio del autoritarismo. En una verdadera democracia, la pluralidad como valor —y no sólo en su sentido estadístico— constituye la fuerza misma de construcción de la nación. La unidad de una nación a partir del reconocimiento de la diversidad de sus componentes implica un rechazo de la versión racial del “crisol de razas” en favor de un concepto que se basa en los múltiples aportes propios de una sociedad heterogénea. Estos principios, sin embargo, no son suficientes para afianzar un sistema democrático. Particularmente en países que han emergido de experiencias represivas, la democracia perdurará si logra demostrar beneficios tangibles en la vida cotidiana de los habitantes. A ellos se sumará un sistema de valores basado en la justicia social y la dignidad humana; es decir, se recuperará —y esta vez con una apuesta por la capacidad de eficacia de los gobiernos democráticos— el ideario que en el siglo pasado sirvió de base para la construcción de

las naciones americanas. Por ello mismo no es sorprendente —como lo indicara anteriormente— que algunos escritores, restringidos por la represión para hablar explícitamente de sus días, hayan vuelto la mirada hacia las etapas fundacionales de la nación. Esta práctica constituyó, en sí, un ejercicio de memoria histórica.

La consolidación de las instituciones democráticas, el acceso mismo a las vías de democratización, posibilita no sólo que se traten temas censurados o soslayados bajo los regímenes dictatoriales sino que también se produzca una apertura mayor hacia sectores marginados y hacia grupos minoritarios que padecen diversas medidas discriminatorias, tanto por las así llamadas “tradiciones culturales” como por las que caen bajo el peso de la “inevitabilidad” de las leyes del mercado: se elige ser pobre o rico. El caso de los “migrantes” no es ajeno a este sistema. El orgullo en lo nacional, el reconocimiento de lo propio como valor superior —acto de fe que está instalado en la raíz misma de la xenofobia y las resultantes secuelas de violencia— implica la *ajenidad* y, en casos extremos, la democratización de los otros. El otro es aquel que no es como uno; es extranjero, extraño, extra; es lo sobrante de las fibras articuladas en torno a una cultura que no abandona el deseo irracional y perverso de creerse homogénea. Y sabemos que no hay democracia posible mientras no se reconozca el derecho a la diferencia, mientras el ser diferente provoque el resurgimiento de la barbarie.

Se escribe para enunciar en una voz propia aquello que pronto pasará a la esfera pública. En el mejor de los casos, la singularidad es la marca diferencial de un nombre, de una cultura, de una nación. Con lo cual, una literatura que señala su propio espacio, y que lo hace mediante cualquier mancha temática, puede ser leída, en principio, como un potencial ejercicio de democracia. En la medida en que se sigue ampliando el alcance de lo marginal, del sentirse marginado, fuera del juego e impotente ante el goce de la corrupción instaurada en demasiados gobiernos y circuitos financieros, también las letras —sin por ello implicar una simple relación de causa y efecto— irradian hacia áreas que no responden, ni tienen por qué responder, a patrones preestablecidos.

Cuando me refiero a las proyecciones de la historia y hablo de la memoria aludo a ella en tanto que posee la capacidad de preservar el pasado pero, además, de ejercer actos de recuperación tendientes

a regenerar una nación. El poder de dicha memoria no puede ser menospreciado, como lo han verificado los gobiernos civiles al cancelar los recursos legales disponibles por parte de las víctimas de las familias afectadas por la violencia de la represión. En este marco propongo que la cultura —entendida en una amplia acepción que abarca la educación y las artes—, junto a la participación civil en el desarrollo y cumplimiento de los valores democráticos y de los derechos humanos, asuma la tarea fundamental de dismantelar las políticas de la desmemoria y del olvido. Y, aún más, que desde y por medio de la cultura, se elaboren estrategias para impulsar el desarrollo y la preservación de la sociedad civil.

El 8 de enero de 1914 Kafka apuntó en su diario: “¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas si tengo algo en común conmigo mismo.” Del extrañamiento ante el ser, ser uno mismo, ser desde allí uno con los demás, surge la interrogante sobre la figura que urde los textos. Se transita del ser a la nación, a ser-uno-con-los-otros, a una cultura que trascienda los intereses y señas de identidad más próximos. ¿Acaso todo discurso, en uno de sus andariveles no postula en el enunciado mismo la existencia de lo otro, del otro? ¿Y esta apertura no está acaso implícita en la práctica literaria? Jamás se deja de escribir una biografía personal, una mitología nacional; siempre se monta un imaginario para la época que nos ha tocado (sobre)vivir, aun cuando ésta sólo alcanza a expresarse mediante los silencios. Quizá parezca un desvarío proponer la existencia de *una literatura de la tristeza*, máxime cuando tantos círculos celebran el goce triunfal de la victoria (posible pero aún no obtenida) contra el autoritarismo y los logros de la iniciativa privada. Quizá no lo sea tanto pensar en una literatura en la que se produzca la mesurada, exigente, responsable celebración de la supervivencia.

Ser parte del primer mundo, de la internacional democrática, garantiza la pronta o eventual aceptación y el abandono de la culpa por pecados ajenos: el crimen fue de un estado de excepción —arguyen— y ya nada será comparable a esos años. Quizá también por ello es desmesurada la tolerancia ante la perversión de la justicia y la corrupción financiera. Todo parecería ser ahora un problema de administración: se administra el pasado de la represión y la corrupción así como el éxito del libre mercado y sus cuotas de segura pobreza e inequidad con la retórica de la democracia.

Las experiencias límite marcan un deslizamiento de las fronteras de la representación tanto en el arte como en el discurso de la historia. En el campo de batalla del imaginario de una nación, los crímenes son depurados o magnificados según convenga a la re-construcción de un pueblo y así aparecerá definida por su liderazgo político. Hay matanzas que se desvanecen, pueblos que jamás han existido, exageraciones que se granjean la piedad de olvidadizos perdonavidas.

También hay puntos de partida en una nueva historia que son ineludibles. Entre ellos está el simple hecho de que sin memoria —y, en el peor de los casos, incluso de una memoria distorsionada al servicio de un partido político— no hay democracia posible. Sin la resemantización de la historia y de la memoria histórica, la cultura participa en este proceso sólo por el hecho de ejercer la libertad de expresarse en cuanto tal en las diversas instancias de consolidación del Estado democrático. Quizás algunos claudiquen ante la posibilidad de rescribir historias lejanas, pero aún hay culpas históricas al alcance de la mano que no pueden ser soslayadas.

¿Prescripción temática? De ninguna manera. Todo participará, o no, en estas mismas instancias en la medida en que sea enunciado desde una condición que se sabe componente integral de días y noches de transformación y, cabe esperar, de avance. Reconozco el dejo utópico de estas palabras, pero éste sólo se da en la medida en que lo utópico se entienda como la posibilidad de apostar a un territorio material regido por el Estado de Derecho.

Es posible que en democracia, le corresponda a la cultura, en algunas manifestaciones, la mediación del rescate. Sin propósitos didácticos manifiestos, es imprescindible que nos interroguemos cómo podemos contribuir a la memoria y a la reconstrucción democrática desde cada una de nuestras instancias. Más que historias formales y más que monumentos oficiales, en el largo, en el plazo histórico, importa cómo se redacta la versión y el legado de estos años; cómo se crea en democracia y, cabe esperar, para la democracia. En estos años, ello significa cómo hablar desde este terriblemente fallido y recuperable espacio para construir un imaginario que no se reduzca a cumplir otro segmento de un ciclo que merecemos haber superado.